

NUMERO 24

24.^A REUNION - 19.^A SESION ORDINARIA - JUNIO 30 DE 1863

Presidencia del señor PAZ

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alsina, Bárcena, Bustamante, Correa, Cullen, Daract, Dávila, Elías, Ferré, Fragueiro, Gallo, Gómez, González, Laspiur, Lucero, Madariaga, Moreno, Navarro, Palma, Posse, Uriburu, Vega, Victorica y Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Frías y Piñero.

SUMARIO

Consideración en particular del proyecto de ley número 2 por el que se definen los crímenes que son de la competencia de los tribunales nacionales y se establece su penalidad, y aprobación con modificaciones del mismo, salvo dos adiciones propuestas por los señores Vega y Alsina, cuya discusión se postergó.

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de Junio del año del Señor de mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente del Senado y señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores Frías y Piñero, con aviso.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior de veintisiete del corriente (18.^a ordinaria).

Sr. Presidente. — No habiendo asuntos de qué dar cuenta se pasará a la orden del día. Esta la forman los proyectos relativos a la Corte Suprema de Justicia, puesto que siguiendo la indisposición del señor ministro de hacienda, no se puede considerar el proyecto sobre bancos. La Cámara decidirá si se ha de leer el proyecto número 2, o si se ha de proceder lo mismo que con el anterior.

Sr. Madariaga. — ¿El señor ministro de culto no debía venir?

Sr. Presidente. — Sí, señor; pero no ha llegado aún.

Sr. Bustamante. — Como estos proyectos no se han leído antes de ahora, ni cuando el Poder Ejecutivo los mandó, ni cuando la Comisión los despachó, me permito proponer que se lea cada artículo, haciéndose una pequeña pausa por si hay alguna observación y si no la hubiere se pasará inmediatamente adelante. Me parece que es el modo más pronto de concluir.

Sr. Presidente. — La Cámara resolverá.

Sr. de la Vega. — Entiendo que nos ha de tomar demasiado tiempo la lectura. Lo más conveniente sería seguir el orden establecido.

Sr. Palma. — Parece que la Comisión entiende que estando la idea aprobada en general, debía proseguirse como hasta ahora; sin embargo, esto no se opone a lo que propone el señor senador por Jujuy, que se vaya leyendo artículo por artículo.

—Puesto a votación si se había de leer el proyecto como lo proponía el señor senador por Jujuy, fué desechada la proposición por negativa.

—Se puso a discusión el proyecto número 2.

Núm. 2

Proyecto de ley definiendo los crímenes cuyo conocimiento compete a los tribunales nacionales y estableciendo su penalidad.

TITULO I

De la traición

Artículo 1º — Todo individuo argentino o persona que deba obediencia a la Nación Argentina, comete el delito de traición definido por el artículo 103 de la Constitución general, ejecutando cualquiera de los siguientes hechos:

- 1º Provocando a una potencia extranjera a declarar la guerra a la Argentina;
- 2º Tomando las armas contra ésta bajo las banderas enemigas;
- 3º Facilitando o procurando facilitar al enemigo la entrada en el territorio nacional, el progreso de sus armas, o la toma de una plaza, o puerto militar, buque del Estado o almacén de municiones, de boca o de guerra;
- 4º Suministrando voluntariamente a las tropas enemigas caudales, armas, embarcaciones, efectos o municiones, u otros medios directos para hostilizar a la Nación;
- 5º Reclutando y levantando gente dentro del territorio nacional para el servicio de una potencia enemiga; seduciendo las tropas de la Nación para engrosar las filas enemigas o informando a los jefes enemigos con planos y noticias conducentes a facilitar las hostilidades;
- 6º Impidiendo que las tropas nacionales reciban en tiempo de guerra los auxilios y noticias indicadas en los incisos 3º y 4º.

Art. 2º — Los autores o cabezas principales de la traición, y los funcionarios públicos de un orden superior, jefes del ejército o de la guardia nacional que la hubieren apoyado o sostenido, serán castigados con la pena ordinaria de muerte.

Los oficiales subalternos y los empleados inferiores sufrirán la pena de trabajos forzados desde cinco a diez años.

Los soldados y los meros ejecutores, la de trabajos forzados por dos a cinco años. Estos y los comprendidos en la anterior clasificación, quedarán además inhabilitados perpetuamente para obtener cargos públicos.

Art. 3º — La conspiración de dos o más personas para los delitos expresados en el artículo 1º, si fuese descubierta antes de darse principio a la ejecución, se castigará con trabajos forzados.

En los individuos comprendidos en la primera clasificación del artículo 2º, de cuatro a ocho años.

En los de la segunda clasificación, de dos a cuatro años.

En los de la tercera, de uno a dos años, y con la inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Art. 4º — Quedará eximido de toda pena el que revelase la conspiración a la autoridad pública antes de haber comenzado el procedimiento.

TITULO II

De los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación

Art. 5º — El que ejecutase en la Nación bulas, breves, rescriptos o despachos de la Corte Pontificia, a que el gobierno nacional no haya dado pase, o les diese curso o los publicare, será castigado con la pena de prisión desde uno hasta tres años, o con una multa de trescientos a mil pesos fuertes o con una y otra, según la gravedad del caso.

Art. 6º — Si el que cometiere el delito de que se trata en el artículo precedente fuere empleado de la Nación, quedará inhabilitado por tres a seis años para desempeñar cargos públicos.

Art. 7º — El que por actos hostiles no aprobados por el gobierno diere motivo a una declaración de guerra contra la Nación o expusiere a los ciudadanos a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será condenado a dar una satisfacción pública, a trabajos forzados de uno a tres años, o a sufrir la pena de la violencia cometida si fuere mayor.

Si por efecto de dichas hostilidades resultare la guerra será castigado con trabajos forzados de cinco a diez años.

Art. 8º — Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o una multa de trescientos a mil pesos fuertes, o una y otra juntamente, al que violase los tratados legítimamente concluidos con naciones extranjeras, las treguas o armisticios acordados con la potencia enemiga, o sea entre las fuerzas beligerantes de mar o de tierra, y los salvoconductos de las que los manden.

Art. 9º — El que violase la inmunidad personal o el domicilio de los embajadores u otros

ministros de las potencias extranjeras, será castigado con prisión de seis meses a dos años.

Art. 10. — Los ministros de justicia o cualesquiera funcionarios públicos que violaren los derechos, prerrogativas o inmunidad real o personal de los embajadores, o ministros representantes de las potencias extranjeras, o de sus casas, familias o comitivas, serán condenados a dar satisfacción pública o privada, según haya sido la violación, y suspensos de empleo y sueldo por uno a tres años.

TITULO III

De la piratería

Art. 11. — Se comete piratería:

- 1º Practicando en la mar o en los ríos de la República algún acto de depredación contra argentinos, o súbditos de otra Nación que no se halle en guerra con la Argentina;
- 2º Cuando abusando de la patente de corso legítimamente concedida, practicase algún acto de depredación o cualquier hostilidad contra los buques de la República o de otra Nación contra los que no se hubiere recibido autorización para hostilizar;
- 3º Apoderándose de algún buque o de lo que pertenece a su equipaje, por medio de fraude, o de violencia cometida contra su comandante;
- 4º Entregando un buque a los piratas, o lo que pertenece a su tripulación;
- 5º Oponiéndose con amenazas o con violencias a que el comandante o la tripulación defiendan el buque atacado por piratas;
- 6º Navegando armada cualquier embarcación sin pasaporte, sin matrícula del equipaje, u otro documento que pruebe la legitimidad de su viaje;
- 7º Traficando el argentino o extranjero residente en la República, con piratas conocidos, suministrándoles cualquier auxilio, o manteniendo inteligencia con ellos;
- 8º Navegando un comandante de buque armado con dos o más patentes de diversas potencias.

Art. 12. — Los que cometan el crimen de piratería de cualquiera de los modos expresados en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo

precedente, serán condenados a la pena de trabajos forzados por ocho años.

El comandante de un buque que se halle comprendidos en el inciso 6º, sufrirá de dos a seis años de trabajos públicos y su tripulación de uno a cuatro años de la misma pena.

Los que incurrieren en los casos de los incisos 7º y 8º serán condenados a los mismos trabajos por el tiempo de dos a ocho años.

Art. 13. — Incurrirán en la pena de muerte, o en la de trabajos forzados por diez años, los que cometieren el crimen de piratería.

- 1º Siempre que hubieren apresado alguna embarcación al abordaje o haciendo fuego sobre ella;
- 2º Siempre que el delito fuere acompañado de homicidio, o de mutilaciones en las personas de los apresados;
- 3º Siempre que fuere acompañado de violación, estupro u otros atentados graves contra la honestidad;
- 4º Siempre que los piratas hayan abandonado algunas personas sin medio de salvarse;
- 5º En todo caso el patrón o capitán pirata sufrirá la pena primeramente indicada.

TITULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION

Rebelión

Art. 14. — Son reos de rebelión los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno nacional para cualquiera de los objetos siguientes:

- 1º Para destruir la Constitución jurada por la Nación y cambiar la forma de gobierno;
- 2º Para deponer al presidente de la Nación, despojándolo de su autoridad constitucional, o para arrancarle alguna medida o concesión o para impedir la transmisión de la misma autoridad en los términos y formas establecidas en la Constitución;
- 3º Para impedir las elecciones de diputados y senadores nacionales o para estorbar las reuniones legítimas del Congreso;
- 4º Para disolver el Congreso o impedir las deliberaciones y funciones de los poderes colegisladores o arrancarles alguna resolución violando el recinto de sus sesiones.

Art. 15. — Los que induciendo y determinando a los rebeldes hubieren promovido o sostuvieren la rebelión y los caudillos principales de ésta sufrirán la pena de extrañamiento por diez años, pero si fuesen personas constituídas actualmente en autoridad o que la hubieren obtenido durante la rebelión; si hubiere habido combate entre los rebeldes con la fuerza fiel al gobierno o entre unos ciudadanos con otros; o si hubieren causado estragos que hayan puesto en peligro la vida de las personas; si sacaren gente por medios violentos, exigieren contribuciones o distrajeren los caudales públicos de su legítima inversión, será además cada uno de ellos condenado a pagar una multa que no baje de dos mil, ni exceda de seis mil pesos fuertes.

Art. 16. — Los que ejercieren un mando subalterno en la rebelión, serán desterrados por cuatro a seis años o pagarán una multa de mil a tres mil pesos fuertes, o una y otra pena juntamente.

Art. 17. — Los meros ejecutores serán destinados al servicio militar en las fronteras por dos a cuatro años, o pagarán una multa de trescientos a seiscientos pesos fuertes.

Art. 18. — Los que se hayan hecho reos de crímenes particulares durante la rebelión, o con ocasión de ella serán castigados con la pena mayor que corresponda a estos delitos.

De la sedición

Art. 19. — Hay sedición cuando una provincia se alza en armas contra otra por cualquier causa o motivo y la invade sin expresa autorización del gobierno nacional o cuando permite que bandas armadas salgan de su territorio para invadir el de otra provincia con el objeto de hacer prevalecer los partidos en que se hubieren afiliado.

Art. 20. — Son además reos de sedición los que se alzan públicamente:

- 1º Para impedir la promulgación o la ejecución de las leyes del Congreso o la libre celebración de las elecciones populares, para los nombramientos nacionales en los comicios, o juntas electorales que tengan lugar en alguna localidad;
- 2º Para impedir a cualquier autoridad nacional el libre ejercicio de sus funciones y la ejecución y cumplimiento de las providencias administrativas o judiciales en alguna provincia.

Art. 21. — Los que induciendo y determinando a los sediciosos hubieren promovido o sostuvieren la sedición y los caudillos principales de

ésta, serán castigados con la pena de extrañamiento por seis años; pero si fueran personas que ejercían autoridad o se hubieren apoderado de caudales u otros bienes públicos o particulares, o hubiere habido combate entre los ciudadanos, o acompañare al crimen cualquiera otra de las circunstancias enumeradas como agravantes en el artículo 15, pagará además, cada uno de ellos, una multa de mil a tres mil pesos fuertes, que en los casos del artículo 19 se destinará a favor de la provincia invadida.

Art. 22. — Los que ejercieren un mando subalterno en la sedición, serán desterrados por dos a cuatro años o condenados a pagar una multa de quinientos a mil quinientos pesos fuertes, aplicable a la Nación o a la provincia invadida, según los casos.

Art. 23. — Los meros ejecutores serán destinados al servicio militar de las fronteras por dos años o pagarán una multa de trescientos pesos aplicables a la Nación o a la provincia invadida.

Art. 24. — Los delitos particulares cometidos en la sedición o con motivo de ella, serán castigados con la mayor pena que les corresponda por las leyes respectivas.

Art. 25. — No se reputará sedición la reunión de una población o de un número cualquiera de ciudadanos desarmados y en orden, sin pretensiones de atribuirse la soberanía del pueblo, celebrada con el objeto de reclamar contra las injusticias, vejaciones y mal comportamiento de los empleados de la Nación.

Disposiciones comunes a los dos títulos anteriores

Art. 26. — Luego que se manifieste la rebelión o la sedición, la autoridad nacional más inmediata intimará hasta dos veces a los sublevados que desde luego se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

Las intimaciones se harán a toque de tambor u otro instrumento apropiado.

No serán necesaria respectivamente la primera y la segunda intimación, desde el momento en que los sublevados hagan uso de las armas.

Art. 27. — Los que sedujeren tropas para cometer el delito de rebelión sufrirán la pena de trabajos forzados por el tiempo de dos a cuatro años, y los que las sedujeren para la sedición, destierro de dos a cuatro años.

Art. 28. — Si llegaren a tener efecto la rebelión o la sedición los seductores se reputarán promovedores y respectivamente comprendidos en los artículos que les conciernen.

Art. 29. — Las autoridades de nombramiento directo nacional que no hubieren resistido la rebelión o la sedición por todos los medios que estuvieren a su alcance, perderán sus empleos y quedarán inhabilitados por cinco años para obtener cargos públicos.

TITULO V

De los desacatos contra la autoridad y otros desórdenes públicos

Art. 30. — Cometén desacato contra las autoridades:

- 1º Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores y los que injurien, insulten o amenazan en los mismos actos a algún diputado o senador;
- 2º Los que calumnien, insulten o amenacen a algún diputado o senador por las opiniones manifestadas en las Cámaras;
- 3º O a los ministros del gobierno nacional o a otras autoridades en el ejercicio de sus cargos;
- 4º O a un superior con ocasión de sus funciones y en el acto de ejercerlas.

En todos estos casos la provocación al duelo, aunque sea privada o embozada, se reputará injuria grave para todos los efectos de este artículo.

Art. 31. — Si el desacato consiste en la perturbación del orden de las sesiones, la pena será la prisión de uno a cuatro meses, o una multa de veinte a cien pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Art. 32. — Si consistiere en calumnia, o el insulto de que habla el artículo 30 fuere grave, la pena será la de prisión de dos hasta doce meses, o una multa de cuarenta a cuatrocientos pesos fuertes en favor del ofendido, o una y otra conjuntamente.

Art. 33. — Los que causen tumulto o perturbasen gravemente el orden en las audiencias de la Suprema Corte, en los tribunales de los jueces de sección, o en algún comicio electoral para empleados de la Nación, sufrirán de uno a cuatro meses de prisión o una multa de veinte a ochenta pesos fuertes, o una y otra pena conjuntamente.

Art. 34. — Los que falsificaren en alguna elección nacional las listas de votos, leyendo distintos nombres de los que en ellas se encuentren, inscribiendo o haciendo inscribir otros supuestos, aumentando o disminuyendo los votos o los pliegos de listas, serán castigados con prisión por seis meses a tres años, o con una multa de ciento cincuenta a novecientos pesos fuertes o con una y otra pena conjuntamente.

Art. 35. — El que se presentare armado en los comicios públicos o penetrase armado en un colegio electoral para los nombramientos de empleados nacionales, será castigado con una multa de veinte a cien pesos fuertes sin perjuicio de las penas en que incurriere por el uso que hiciere de las armas.

Art. 36. — El que con violencia o con fines contrarios a la Constitución, o por otro motivo reprobado impidiere a un senador o diputado asistir al Congreso, sufrirá la pena de prisión por seis a dieciocho meses, o pagará una multa de doscientos a seiscientos pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Art. 37. — El juez o autoridad que en el arresto o formación de causa contra un senador o diputado al Congreso nacional, no guardare la forma prescrita por la Constitución, pagará una multa de quinientos a mil pesos fuertes aplicables a los hospitales de la localidad que representen.

TITULO VI

De la resistencia a la autoridad y sustracción de presos

Art. 38. — El que resistiere a un agente de la autoridad nacional que le intimare prisión, o a un ciudadano en el caso de flagrante delito, sufrirá la mayor pena que, según las leyes, corresponda al hecho que motiva su arresto, y si lo maltratase, hiriere o matase, se le impondrá además la pena mayor de este nuevo delito.

Art. 39. — Los que sustrajeran de las manos o poder de un oficial de justicia o de otro empleado público, al que se halle legalmente preso, serán castigados con la pena de trabajos forzados por uno a tres años, o con una multa de quinientos a mil quinientos pesos o con una y otra conjuntamente.

Art. 40. — Los que libertasen de poder de un ciudadano no investido de autoridad pública a un reo aprehendido en flagrante delito, sufrirán la pena de trabajos forzados desde seis a dieciocho meses o una multa de trescientos a

ochocientos pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Art. 41. — Los que se introdujeran por fuerza en una cárcel pública y obligasen al alcaide o encargado de ella a que deje fugarse los presos, si tiene efecto la fuga, serán castigados con la pena de trabajos forzados por tres a seis años, o con una multa de mil quinientos a tres mil pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente.

Art. 42. — Los que facilitasen la fuga de los presos por medio de astucia o soborno, sufrirán la pena de trabajos forzados por seis meses hasta un año, o una multa de trescientos a quinientos pesos, o una y otra conjuntamente.

Art. 43. — El alcaide o encargado por la autoridad nacional de la custodia de los presos que los dejase fugar, si lo hiciese por connivencia, será castigado con trabajos forzados por dos a seis años; si fuere por negligencia, con uno o dos años de la misma pena, o con una multa de quinientos a mil pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente.

Art. 44. — En todos los casos de los artículos 41 y 42 y en el primero del precedente, los culpables responderán mancomunadamente de las condenaciones pecuniarias a que estuvieren o debieren estar sujetos los fugados por la causa de su sentencia, detención o prisión.

TITULO VII

De la interceptación y sustracción de la correspondencia pública

Art. 45. — Los que obstruyeren o retardaren el pasaje de la valija de la correspondencia pública, ya sea transportada en carruaje o a caballo, pagarán por cada vez una multa de cincuenta a trescientos pesos fuertes, o sufrirán la pena de trabajos forzados desde uno a seis meses, o una y otra conjuntamente.

Art. 46. — Los que con violencia despojen a un conductor de la correspondencia pública de la valija, o de una parte de ella, sufrirán la pena de trabajos forzados por dos a cuatro años, o una multa de mil a dos mil pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Art. 47. — Los que hirieren a un correo en ejercicio, si las heridas fuesen leves, sufrirán la pena de trabajos forzados por un año, o una multa de quinientos pesos fuertes, o una y otra; si las heridas fuesen tales que le impidieren continuar el viaje, la pena podrá extenderse hasta cinco años; y si de las heridas

resultare la muerte, sufrirán la pena que por las leyes vigentes en la República corresponda a este delito.

Art. 48. — Los que hurten la valija o sustraigan de ella, o de una oficina de correos, alguna carta o paquete, sufrirán de dos a seis meses de trabajos públicos o una multa de cien a trescientos pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Art. 49. — Todo empleado de la administración de correos o capitania de puerto que detenga, oculte, destruya o abra una carta dirigida a la administración para ser entregada o conducida, perderá su empleo, será destinado a trabajos forzados por dos a seis meses, o pagará una multa de cien a trescientos pesos, o sufrirá una y otra pena.

Art. 50. — Si la carta detenida o abierta contuviese billetes de banco, o letras de cambio o crédito, o cualquier otro documento para recibir o pagar dinero, el empleado que resulte delincuente quedará inhabilitado para obtener cargos públicos y sufrirá la pena de trabajos forzados por cinco años.

En la misma pena de trabajos forzados por cinco años incurrirán los que en los casos de los artículos 46 y 48 despojen al correo, o hurten la correspondencia de una oficina de la administración, si ella contuviere los valores expresados en este artículo.

TITULO VIII

De la sustracción o destrucción de documentos depositados en las oficinas públicas

Art. 51. — Los que sustrajeran, destruyeren o robaren los procesos o actuaciones seguidos por ante la justicia nacional, u otros papeles, registros, actas y efectos custodiados en los archivos, oficinas o depósitos públicos, o entregados a un empleado público como tal, sufrirán la pena de trabajos forzados por uno a tres años, o una multa de quinientos a mil quinientos pesos.

Art. 52. — Los archiveros, depositarios o empleados que con su negligencia hubieren dado lugar a la sustracción, robo o destrucción, perderán sus empleos y pagarán una multa de cien a trescientos pesos fuertes o sufrirán una prisión de tres hasta nueve meses, o una y otra pena conjuntamente.

Art. 53. — Si la sustracción o destrucción de documentos se hubiere cometido con violencia en las personas, o asalto de los conduc-

tores, se castigará con la pena de trabajos forzados de dos a cuatro años, o con una multa de mil a dos mil pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente.

TITULO IX

De las falsedades

Art. 54. — Los que falsifiquen la firma del presidente de la Nación, o la de sus ministros de Estado, o el sello nacional, o cualesquiera otros sellos usados por cualquier autoridad u oficina pública nacional, serán castigados con la pena de trabajos forzados por dos a seis años, o con una multa de mil a tres mil pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente.

Art. 55. — La falsificación de las marcas y contraseñas de que se use en las oficinas nacionales para identificar cualquier objeto, o para asegurar el pago de impuestos, será castigado con la pena de cuatro a doce meses de trabajos forzados, o con una multa de doscientos a quinientos pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente.

Art. 56. — La falsificación de los sellos, marcas y contraseñas que usen los establecimientos de industria o de comercio con objeto de defraudar la renta nacional, será castigada con la pena de trabajos forzados por dos a seis meses, o con una multa de cien a trescientos pesos, o con una y otra conjuntamente.

Art. 57. — Los que fabriquen, introduzcan o expendan moneda falsa de especie que tenga curso legal en la Nación y sea de un valor inferior a la legítima, serán castigados con la pena de trabajos forzados desde cuatro hasta siete años y con una multa de quinientos a cinco mil pesos fuertes, si la moneda fuere de oro o plata; pero si fuere de cobre, aunque su valor no sea inferior al de la legítima, con la de trabajos forzados por dos a cuatro años y multa de cincuenta a quinientos pesos fuertes.

Si la moneda falsa se hubiere recibido en pago de buena fe y se expendiere con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

Art. 58. — El que cercenare moneda legítima de oro o plata será castigado con uno a dos años de trabajos forzados y una multa de cincuenta a quinientos pesos fuertes.

El que expendiere o introdujere moneda cercenada incurrirá en las mismas penas.

Art. 59. — El que introdujere o expendiere falsos títulos de la deuda pública al portador, billetes o libranzas del Tesoro, inscripciones de

deuda, u otro documento de crédito o valores nacionales, o de un Banco erigido con autorización del gobierno nacional y el que los falsificare, serán castigados con la pena de trabajos forzados por cuatro a siete años y con una multa de quinientos a cinco mil pesos fuertes.

Art. 60. — El que habiendo adquirido de buena fe los títulos y efectos de que hablan los artículos precedentes, los expendiere después con conocimiento de la falsedad, será castigado con la multa del tanto al triple del valor del documento, no pudiendo bajar de cincuenta pesos fuertes.

Art. 61. — Será castigado con la pena de trabajos forzados de dos a cuatro años y multa de cien a mil pesos fuertes, el empleado nacional que abusando de su oficio cometiere falsedad:

- 1º Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica;
- 2º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido;
- 3º Atribuyendo a los que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho;
- 4º Faltando a la verdad en la narración de los hechos;
- 5º Alterando las fechas verdaderas;
- 6º Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido;
- 7º Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que contenga el verdadero original;
- 8º Ocultando con perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial.

Art. 62. — El particular que cometiere en documento público u oficial, o en el que hubiere presentado o introducido en las oficinas de la Nación, o en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de trabajos forzados de uno a tres años y multa de cien a mil pesos fuertes.

Art. 63. — El culpable de falso testimonio en causa criminal sobre delito grave en contra del acusado, será castigado con la pena de cuatro a diez años de trabajos forzados.

Art. 64. — En las causas criminales menos graves o correccionales, el falso testigo contra

el acusado sufrirá la pena de trabajos forzados desde seis meses hasta dos años.

Art. 65. — Si el falso testimonio fuere dado en favor del acusado:

En causa eriminal grave, se castigará con trabajos forzados desde dos a cinco años, o con una multa de mil a dos mil quinientos pesos, o con una y otra conjuntamente.

En causa correccional, con trabajos forzados de tres hasta doce meses, o con una multa de ciento cincuenta a quinientos pesos fuertes, o con una y otra pena.

Art. 66. — El falso testimonio en causa civil será castigado con trabajos forzados desde cuatro a dieciocho meses, o con una multa de doscientos hasta setecientos pesos fuertes, o con una y otra pena conjuntamente.

Art. 67. — Las penas de los cuatro artículos precedentes serán aplicables a los peritos que declaren falsamente.

Art. 68. — Siempre que la declaración falsa del testigo fuere dada mediante cohecho, las penas serán las del extremo mayor designado, y si el precio o dádiva se hubiere recibido, será decomisado.

Art. 69. — Cuando el testigo o perito, sin faltar substancialmente a la verdad, la altere con reticencias o inexactitudes, las penas serán:

1º Multa de veinte a doscientos pesos fuertes, si la falsedad recayere en causa sobre delito;

2º De diez a cien pesos fuertes, si recayere sobre falta a negocio civil.

Art. 70. — Las acusaciones o denuncias que hubieren sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada, serán castigadas con las penas de los testigos falsos contra el acusado.

Art. 71. — Serán castigados como reos de falso testimonio, los que presentaren a sabidas testigos o documentos falsos en juicio.

TITULO X

Del cohecho y otros delitos cometidos por empleados o contra el tesoro nacional

Art. 72. — Todo empleado de la Nación en el orden administrativo o judicial, agente o encargado de cualquier ramo de la administración pública que recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o que aceptare una promesa directa o indirecta para hacer o dejar de hacer alguna cosa faltando a sus deberes, será cas-

tigado con la pérdida del empleo e inhabilitación por cinco a diez años para obtener otro alguno, y con una multa igual al triple del valor de la dádiva o promesa; si ésta se la hicieren por el cumplimiento de sus deberes, perderá su empleo y pagará el duplo del valor de la gratificación o recompensa.

Art. 73. — El juez que diere por precio una sentencia, aunque sea justa, incurrirá en las penas del primer inciso del artículo anterior.

Si la sentencia fuere injusta en causa civil, o siendo en causa criminal, no se impusiere por ella pena corporal, sufrirá además la de prisión por seis meses a dos años.

Si por la sentencia injusta se impusiere pena corporal, se aplicará al juez la misma, a excepción de la de muerte, que se conmutará a su respecto en la de trabajos forzados por diez años.

Art. 74. — Los árbitros que por precio dieren sentencia injusta sufrirán las penas de inhabilitación y multas designadas en el primer inciso del artículo 72.

Art. 75. — El que diere o prometiére las dádivas en los casos de los tres artículos precedentes, será castigado con las mismas penas que el empleado o árbitro corrompido, a menos que, siendo el soborno en causa criminal, en favor del reo, fuere hecho por su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano o afín en los mismos grados, en cuyo caso solamente se impondrá al sobornante una multa de valor igual al de la dádiva o promesa.

Art. 76. — Todo funcionario público nacional que se constituya deudor o acreedor de un oficial o empleado que le sea superior o se preste como fiador suyo o consienta que lo sea por él, o contraiga con él otras obligaciones pecuniarias, será suspendido en su empleo por tres hasta nueve meses.

La misma pena se aplicará al oficial o empleado superior que contraiga o acepte las indicadas obligaciones.

Art. 77. — El administrador, recaudador o receptor, depositario de caudales públicos y todo el que tuviere obligación de dar cuentas al gobierno nacional, que distrajere, sustrajere o hurtare los caudales públicos o privados, los efectos de créditos representativos de esos valores, o cualesquiera documentos, títulos, actas o efectos mobiliarios puestos en su poder por razón de su cargo, será castigado con la pena de trabajos forzados por cinco a diez años.

Si el que hurtare los caudales o valores no fuere empleado encargado de su custodia, sufrirá la misma pena por tres a seis años.

Art. 78. — El empleado que sustrajere efectos de los almacenes de aduana, sufrirá la pena de cinco a diez años de trabajos forzados.

Si el culpable no fuere empleado, y tampoco le pertenecieren los efectos, será castigado con tres a seis años de la misma pena.

Y si le pertenecieren los efectos, con el triple del valor de los derechos que éstos adendaren y con uno a tres años de trabajos forzados, o con una multa de quinientos a mil quinientos pesos fuertes, o con una y otra pena conjuntamente.

Art. 79. — El que emplee fraudes para apropiarse dineros públicos, o que cobre al gobierno cuentas falsas o fraudulentas, pagará el triple de lo que se apropiare o cobrare y sufrirá además la pena de trabajos forzados por uno a tres años, o una multa de quinientos a mil quinientos pesos fuertes o una y otra conjuntamente.

Art. 80. — El empleado en la administración que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puesto a su cargo, será castigado con la pérdida del empleo, inhabilitación por cuatro a seis años, para obtener otro, y una multa que no pase de dos mil pesos.

Si no se verificare el reintegro, se le aplicará la pena del artículo 77.

Art. 81. — Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurrirá en la pérdida del empleo e inhabilitación por cuatro años para obtener otro.

Art. 82. — El empleado nacional que interviniendo por razón de su cargo en alguna convención de suministros, contrata, ajuste o liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores, o usare de cualesquiera otros arbitrios para defraudar al Estado, será castigado con trabajos forzados por tres a seis años e inhabilitación perpetua para otros empleos públicos.

Art. 83. — El empleado nacional que directa o indirectamente se interesase en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitación para empleos públicos por dos años a seis y una multa de diez a cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio, o si fuere insolvente para el todo o parte de la multa, sufrirá la pena de prisión por un tiempo que no exceda de dos años.

Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y contadores respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación se les hubiere mandado intervenir.

Art. 84. — El empleado o funcionario público nacional de cualquier clase que, sin estar autorizado competentemente impusiere una contribución o arbitrio, o hiciere cualquier otra requisición con destino al servicio público, será castigado con las penas de privación del empleo y multa del cinco al veinticinco por ciento de la cantidad exigida, o siendo insolvente, con prisión que no pase de dos años.

Cuando la exacción hubiere sido resistida por el contribuyente como ilegal, y se hiciere efectiva empleando la fuerza pública, las penas serán las de inhabilitación para cargos públicos por diez años y multa de diez al cincuenta por ciento, o siendo insolvente, una prisión que no pase de cuatro años.

Art. 85. — El empleado que cometiere en provecho propio las exacciones expresadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de trabajos forzados por dos a seis años.

Art. 86. — El empleado nacional que exigiere directa o indirectamente mayores derechos o multas que los que se deban pagar, será castigado con una multa del duplo al cuádruple de la cantidad cobrada o exigida, y si fuere insolvente, con prisión que no pase de un año.

Art. 87. — El que encargado de hacer pagos por razón de su empleo, exija por sí mismo o por medio de un tercero o consiente que otro exija de quien ha de recibirlo una recompensa, gratificación, descuento o derechos no determinados por la ley, perderá su empleo, sufrirá la pena de prisión de dos meses a un año, o una multa de cien a quinientos pesos fuertes, o una y otra conjuntamente.

Disposiciones generales

Art. 88. — La reparación o indemnización de daños y perjuicios, la restitución de lo adquirido ilegítimamente, se entenderán siempre ordenadas, por la presente ley, en los casos en que ellas pudieren tener lugar.

Art. 89. — Cuando el condenado a pagar una multa que no tuviere otra pena en substitución, o a sufrir pena corporal y pecuniaria conjuntamente, no tuviere bienes para satisfacer la última, será destinado a prisión o a trabajos forzados, regulándose a un peso fuerte cada día de prisión, y a dos el de trabajos forzados, pero sin que puedan exceder en ningún caso estas penas de dos años.

Disposición final

Art. 90. — Los delitos contra la Nación no previstos en esta ley, y los comunes cometidos en lugares sujetos a la jurisdicción nacional,

Junio 30 de 1863

CAMARA DE SENADORES

24ª Reunión. 19ª Sesión ordinaria

serán castigados con arreglo a los códigos que forman el derecho común de las provincias, con la moderación en las penas que ha introducido la práctica de los tribunales.

Art. 91. — Comuníquese, etc.

Eduardo Costa.

Sr. Alsina. — Señor: yo pido la supresión del inciso 1º del artículo 1º, o más bien, su traslación a otra sección. Hablando de la traición, se dice en él que se incurre en ella provocando a una potencia extranjera a declarar la guerra a la Argentina. Me parece que según nuestra Constitución, eso no constituye delito de traición. Es un delito indudablemente, y grande, pero no es traición.

La Constitución dice que se comete ese delito, únicamente — fíjese la Cámara en este adverbio — tomando las armas contra la Nación, o favoreciendo con auxilios a los enemigos; creo que son sus palabras. Mas el provocar a una nación extranjera a que nos declare la guerra, no es ni tomar las armas contra la Nación Argentina, ni es prestar auxilios al enemigo, porque no se puede auxiliar a un enemigo que no existe aún. Este inciso del proyecto, supone que no está aún declarada la guerra, sino que se está trabajando porque se declare; y desde entonces, no puede haber todavía enemigos y sino hay enemigos, es imposible unirse a ellos y prestarles ayuda. Por esto, y atendido que en materia criminal, lejos de ampliar ciertas disposiciones, más bien deben ser restringidas, me induce a pedir, de acuerdo completo con el tenor de la Constitución, que ese inciso sea, no diré suprimido, sino llevado a otra sección posterior.

Sr. Navarro. — Estoy enteramente conforme con la observación del señor senador por Buenos Aires.

Sin duda al examinar estos proyectos en la Comisión, por algún accidente, no se ha fijado bien la atención en ese primer inciso del artículo. La Constitución es terminante. Dice que la traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, uniéndose a su enemigo para darle protección y apoyo. Realmente, el provocar a una nación extranjera a que declare la guerra, no es ni tomar las armas ni dar ayuda y socorro a una nación; será otra cualquier cosa, menos eso, será un delito contra la paz o seguridad exterior, delitos clasificados en otro título de este proyecto, pero no traición; y como el delito de traición es un delito muy grave y cuya clasificación debe ser muy precisa porque como dice Mon-

tesquieu, la menor vaguedad sobre el particular puede convertir en despótico un gobierno legal, y esa clasificación y extensión del delito de traición, puesta en planta por los partidos en sus luchas, no sirven — como dice otro autor — sino para que se despedacen y traigan la ruina de todos, yo estaré, pues, porque se suprima este inciso de este título, porque no está bien aquí, y no está comprendido en el texto de la Constitución.

Sr. Uriburu. — En efecto, señor, yo creo que la disposición que contiene este inciso debe figurar más bien entre los delitos contra la tranquilidad de la Nación. Más bien debe trasladarse allí, porque, en efecto, provocar o incitar a que una nación extraña declare la guerra, es comprometer, cuando menos, la tranquilidad de la República; pero como dice muy bien la Constitución, el delito de traición debe consistir únicamente en el hecho de tomar las armas. Estoy conforme con la idea de dar otra colocación a este inciso.

Sr. Palma. — El inciso 1º parece a primera vista que no está de acuerdo con lo que el artículo 105 de la Constitución dispone y a lo que llama traición, pero recuerdo que habiéndose consultado a los autores del proyecto, dijeron que este artículo fué copiado por analogía, de la Constitución de Norte América que contiene una disposición igual. Yo creo que en ese sentido se redactó, pero me parece que realmente es un acto de traición y que un argentino, por ejemplo, estando emigrado, o aunque no lo estuviera, propendiese, o indujese a un poder extranjero a declarar la guerra a su país, comete ese delito. Pero como la Constitución expresa terminantemente que solamente se llama traición el hecho de tomar las armas, o de prestar auxilio al enemigo, parece que este caso no estuviera comprendido. Repito, sin embargo, que el inciso ha sido copiado de la Constitución de Estados Unidos.

Sr. Navarro. — La provocación o la declaración de guerra parece así, a primera vista, que envolvese alguna traición, pero es preciso entender la palabra en el verdadero sentido. Si nos limitamos a lo que significa la simple provocación, no se la puede calificar de traición: será otro delito. ¿De qué manera podrá provocar un individuo particular a una nación, de manera que incurriese en un delito de traición? Si nos ponemos en un caso como el de Méjico, en que el general Almonte ha ido a Francia y ha influido para que declare la guerra a su país, creo que un proceder de esta clase, puede constituir un delito; pero no una traición. Ahora, si ese mismo general u otros

ciudadanos dijese: declárese la guerra, que nosotros ayudaremos de este o del otro modo, ya entonces, la provocación tendría otro carácter; pero estando a la simple provocación, no me parece que constituye delito de traición, porque no habiendo declaración de guerra, no hay enemigos. Enemigos, según lo define el *Digesto*, son aquellos a quienes el pueblo romano declaraba la guerra, o aquellos que habían declarado la guerra al pueblo romano.

De consiguiente, la simple provocación no constituye un acto de traición. Así es que, por mi parte, no tengo inconveniente en que ese inciso se traslade a otra categoría de delitos. Excuso poner más razones, pues esto está bien al alcance de todos.

Sr. de la Vega. — ¿Por qué no se determina desde ya dónde se ha de colocar este inciso?

Sr. Presidente. — La Comisión debe decirlo.

Sr. Uriburu. — Debe colocarse en el título 2º, artículo 7º.

Sr. Alsina. — Yo he pedido la supresión en este título, de este inciso, sin querer indicar donde deba trasportarse, pues eso es materia para discusión. Ahora debe limitarse la votación a si se suprime de aquí nada más.

Cuando llegue el caso de examinar los demás títulos, el señor senador que cree que allí viene bien, lo propondrá. Digo esto, señor, porque no estoy conforme con lo que acaba de indicar un señor senador. Yo, a su tiempo, manifestaré el lugar en que debe ir el inciso, pero no conviene anticipar una discusión que puede venir después.

Sr. Uriburu. — Yo había hecho la indicación de que podía trasladarse a tal parte, con el objeto de que se procediera a votar si se trasladaba el inciso. Si hay otra parte en que él pueda colocarse, tanto mejor.

Sr. Madariaga. — Debe procederse a votar, dejando para después, el ver donde se ha de colocar. Yo también tengo mis razones, porque el sentido de la palabra colocar, admite muchas excepciones.

—Puesto a votación si se suprimía el inciso 1º del artículo 1º, así se resolvió por afirmativa general.

Sr. de la Vega. — Como no comprendo bien el sentido del artículo 38, me permitiré proponer a la Comisión dos casos que espero se servirá explicar. Uno de ellos, es el siguiente: el artículo dispone: «el que resistiere a la autoridad que le intimare prisión, o a un ciudadano, en el caso de flagrante delito, sufrirá la mayor pena, que según las leyes correspondan»,

etcétera. Suponiendo que el hecho que motiva el arresto, fuera un acto de homicidio o en justa defensa: ¿Qué pena sufriría? ¿La de muerte o ninguna? En el primer caso, sería una injusticia muy grande, lo mismo que en el segundo, aunque por el extremo opuesto. Desearía una explicación por parte de la Comisión.

Sr. Navarro. — En un homicidio como el que el señor senador supone hecho en defensa propia, si un agente tiene que contener al homicida, se supone que lo quiere prender en el supuesto de que es criminal, y no es el momento de averiguar si el homicidio es alevoso, aunque todo homicidio lleva siempre esa presunción, mientras tanto no se pruebe lo contrario. Si resultase que el hombre ha sido inocente, la resistencia a la autoridad se castiga con la pena de homicidio. Este es el espíritu del artículo.

Sr. de la Vega. — Entonces es absurdo que a un hombre inocente, por el mero hecho de resistencia a la autoridad, se le castigue con la pena de muerte.

Sr. Navarro. — Supóngase que el que resiste a la prisión de un homicida alevoso, es con el objeto de libertarse.

Sr. de la Vega. — Le advertiré al señor senador que estamos en el caso en que el mismo delincuente resista a la autoridad, no el que otro agente extraño venga a oponerse a la prisión. Estamos en el caso del artículo 38 que se refiere al presunto delincuente que resista a la prisión. Ahora pasaré a poner otro caso.

El delito de piratería, tiene por pena mayor la de muerte. Hay distintas clasificaciones de este mismo delito. Suponiendo que el hecho que ha motivado la prisión, fuese de piratería en tales y cuales casos. ¿Qué pena debe aplicársele si la mayor es la de muerte?

Sr. Navarro. — No tiene analogía un caso con otro.

Sr. de la Vega. — He dicho que tenía que hacer dos preguntas distintas; es en otro terreno que me coloco, porque no alcanzo a comprender el artículo, para poder votar con conciencia.

Hay por ejemplo, tres clases de delitos de piratería: unos que tienen una misma pena, como son los que se consignan en los incisos 1º, 2º, 3º, y 4º. Otra clase de piratería es la del inciso 6º, que tiene una pena distinta, otra la de los incisos 6º y 8º que también tienen su pena distinta; y por fin, los incisos del artículo 13, que son los que tienen la pena mayor. Con esto quiero decir al señor senador, que me parece muy vaga la disposición de ese artículo,

y un juez se encontraría en conflictos para entender la mente del legislador al aplicarla. Descaría, pues, que el señor senador se sirviera explicármela.

Sr. Navarro. — La explicación que tiene es la que antes he dicho. El que resista a la prisión que le intime un agente de la autoridad nacional, porque sabe que según la Constitución, *infraganti*, no sólo pueden prender al delincuente los agentes del gobierno sino cualquiera ciudadano, y entregarlo al juez. Ahora dice el artículo: cualquiera que resista, sea el mismo delincuente, u otro, a la prisión, se le impone la pena que está destinada por la ley al delito mismo que motiva la prisión. El señor senador me ha puesto un caso de un homicidio en defensa propia, que no es delito, a lo que contesto lo que ya antes expuse, que eso se verá después, aunque el homicidio siempre se supone doloso. Pero en caso que resultare que el homicida había sido inocente, la resistencia a la autoridad será castigada con una pena menor arbitraria. Se estaría a aquellas reglas de arbitrio prudente, y se buscaría en las leyes generales un caso que estuviera en analogía con el de que se trata. El señor senador sabe muy bien, que la legislación penal define y castiga por separado el delito de resistencia a la autoridad. Pero por lo general, conviene mucho a la represión de los delitos y a la moral de la autoridad esta sanción penal, y no veo *algún* peligro en ella.

Sr. de la Vega. — Estoy satisfecho sobre ese punto; ahora deseo que se coloque el señor senador en el otro caso.

La primera pena en el delito de piratería será la de trabajos forzados por ocho años; en el segundo, trabajos forzados por seis; en el tercero, de dos a ocho; y en el último, de diez años o pena de muerte. En este caso quiero que se coloque el señor miembro informante y de las explicaciones necesarias. Me parece, pues, que no sería razonable que todo pirata deba ser castigado con la pena de muerte, porque entonces sería someter a una misma condición y penas a todos aquellos que siendo menos delinquentes cometen un mismo delito.

Sr. Navarro. — Me parece que es muy fácil la explicación.

La resistencia a la prisión de un pirata, será castigada con la mayor pena que sufriría la piratería, según las diferentes clases de que se habla en esta ley.

Sr. de la Vega. — Hablaba en el caso en que el mismo pirata hiciese la resistencia.

Sr. Navarro. — Será un nuevo delito que añadirá al primero. Al menos es como comprendo este negocio.

Sr. Laspiur. — Deseo que el señor miembro informante de la Comisión, me explique la diferencia que hay entre uno de los casos del delito de rebelión que establece la ley, o el proyecto que está en discusión, con otro de los casos que clasifica de sedición, y es el siguiente: Dice el artículo 14 del título 4º: «son reos de rebelión los que se alzan, etcétera»; y hablando de sedición, el título 5º dice: «Son además reos de sedición, los que se alzan públicamente para impedir la promulgación o la ejecución de las leyes del Congreso, o la libre celebración de las elecciones populares, etcétera.»

La celebración de las elecciones populares, no puede ser otra sino en aquellas elecciones de carácter nacional, como las de representantes, la de presidente y vicepresidente de la República, y en este caso, que aquí se llama sedición, es el mismo que en el título anterior, se clasifica de rebelión.

Es la misma cosa, a mi juicio.

Sr. Navarro. — La explicación que a mi juicio corresponde, es, que en el primer caso, se trata ya de las autoridades constituídas contra las cuales se levantan públicamente uno o más individuos; mientras que en el caso de sedición, no se trata sino de la celebración de un acto electoral, lo que constituye delitos menos trascendentales, menos públicos de los que traería el impedir la reunión del Congreso, o la elección de diputados y senadores. Para el caso que me refiero, sería preciso levantar fuerzas, hacer reuniones populares; lo que traería mayores consecuencias, y por consiguiente es mayor delito. Esta es la explicación que yo alcanzo a comprender.

Sr. Laspiur. — Siento decir que no me ha satisfecho el señor miembro informante.

El hace una distinción que no existe en la ley. La ley dice: «Es delito de rebelión el que se comete por impedir las elecciones de diputados, etcétera» y luego dice: «es delito de sedición el que se comete por impedir la libre celebración de las elecciones populares.»

Sr. Navarro. — En esta materia, el señor senador sabe muy bien, que es muy difícil poner una línea fija, clara y precisa, porque los delitos afectan tantas y tan distintas circunstancias, que escapan a la clasificación. De todos modos, no me parece que habría peligro ninguno en esta clasificación.

Sr. Laspiur. — Digo que hay una redundancia en clasificar el mismo delito con dos nombres, y que bastaría uno sólo.

Sr. Navarro. — Yo encuentro que hay diferencia en uno y otro caso, porque cuando se

clasifica de rebelión, tiene por objeto impedir absolutamente la elección, y cuando se clasifica de sedición, se refiere a los ciudadanos. En el primer caso, lleva un carácter subversivo que no tiene en el otro.

Sr. Laspiur. — Este delito, en su clasificación, ha de ocasionar confusión, y los delitos deben ser clasificados con toda claridad. Cuando un pueblo se alza para turbar la elección, se alza generalmente para impedir que la elección se haga. Ahora se dice que una cosa es alzarse antes que tenga lugar la elección, o después, es decir que el delito en este caso, no ha hecho sino variar de tiempo, pero es con un mismo fin, el de impedir la elección. Yo no encuentro propiedad ninguna en esta distinción, y creo mejor que se clasifique de rebelión o de sedición, pero que sea una sola clasificación.

Sr. Alsina. — Pido la palabra, si es que esta discusión se da por terminada.

Sr. de la Vega. — Entiendo que debe votarse.

Sr. Alsina. — El señor senador debe formular su moción.

Sr. Laspiur. — Propongo que se deje subsistente la disposición en el inciso 3º del artículo 14, y se suprima en el inciso 1º del artículo 20.

Sr. Navarro. — Parece mejor se suprima el inciso 3º del artículo 14.

Sr. Uriburu. — Es muy delicado hacer una supresión que viene a truncar estas disposiciones, y como se ha dicho muy bien, son dos cosas distintas. A mi juicio no hay confusión, pero es muy delicado el hacer alguna supresión, en el modo en que vamos discutiendo el proyecto. No sé si los señores de la Comisión aceptarán la supresión, que cuando menos puede comprometer la lógica.

Sr. Madariaga. — Debe votarse.

—Puesto a votación si se suprimía la segunda parte del inciso 1º del artículo 20, fué desechado por negativa de 22 votos contra 3.

Sr. Alsina. — Voy, señor presidente, a ocuparme de un artículo muy anterior que se halla en el título segundo y cuya sanción, tal cual está, a mi juicio, no sólo comprometería todos los principios, sino que quizás deshonraría a la Nación.

El dice: «el que ejecutare en la Nación bulas, breves, rescriptos o despachos de la Corte Pontificia», a los que el gobierno nacional no haya dado pase, o el que los circule y publique, incurrirá en tales y tales penas. Parece

que esta disposición revelase odio o prevención a todas las letras pontificias; o que ella no fuese sino el reflejo de sentimientos que han dominado en otros tiempos, y con razón, pues nacían de exageradas pretensiones de la corte romana. No me opongo a que se pene al que ejecute rescriptos de pase negado; pues tal hecho sería realmente una falta a las leyes del país. Pero me fijaré en que no se haya hecho una distinción que debe hacerse. El artículo incluye al que ejecute, por ejemplo, un simple breve, sin haber obtenido el pase; pero tal vez no lo ha obtenido, no porque eso hubiera ofrecido dificultad alguna, sino sólo porque no lo ha presentado, y tal vez no lo ha presentado, por desuido o ignorancia. Aquí la falta no es mayor; es dudosa la intención de desobedecer. El caso es muy distinto cuando se ha presentado el rescripto, y el Poder Ejecutivo le ha negado su exequátur, prohibiendo así que se ejecute, y sin embargo, él es llevado a ejecución. Aquí la falta es grave: hay abierta desobediencia; y a estas dos faltas, tan desiguales entre sí, el artículo las iguala en la pena. Esto es contra principios.

Pero lo más chocante del artículo es, que también pene al que «le diere curso o publicare». En el día, uno de los medios, y el mejor de todos, de publicar un documento, es la imprenta. Es verdad que en algunas legislaciones de países especialmente monárquicos, se prohíbe esa publicación y en la francesa hay una disposición algo análoga a esta, aunque no igual. Pero entre nosotros, sería indebido el prohibir la publicación de un despacho romano, al que el gobierno haya rehusado su aquiescencia. ¿Por qué razón, por qué principio de justicia o de conveniencia pública se prohibiría? Hablo del caso en que el gobierno que negó el pase, no publicó el rescripto; pues si lo publicase, ya no podía ser una falta en nadie reproducirlo. No se prohíbe el mal que haya en que el interesado en el breve, o cualquier otro particular, o el periodista que se ha procurado una copia, lo dé a luz, aunque sea para censurar o refutar el decreto negativo del gobierno; y mucho menos, si no hace más que insertarlo, sin añadir críticas ni comentarios. Obsérvese que el artículo castiga aun el simple hecho de la publicación; de modo que quien lo haga para sostener y apoyar los principios o motivos del decreto, también incurre en pena.

Entre tanto: es indudable que esa publicación, será casi siempre, sino necesaria, al menos conveniente; pues si el gobierno niega el

pase, por alguna razón ha de haber procedido así; y es muy útil, ya que el gobierno nada publica, que se sepa lo que hay, que se examine y discuta el punto o materia, como lo exigen nuestros principios de publicidad, y como se hace todos los días respecto de cualquier medida o acto del gobierno.

El caso más serio que pudiera ocurrir, sería respecto de bulas, cuyo pose se hubiese negado, y que conciernen especialmente a circunscripciones de diócesis, a provisiones de obispados y arzobispados, etcétera. Llegado ese caso, si el obispo las publicara, aun sin comentarios, ¿se le llevaría por eso a la cárcel? En los casos mayores, aun cuando ha habido actos de casi rebelión por parte de algún obispo, la autoridad civil, lo más que ha hecho, de acuerdo con las leyes, es suspenderle el goce de sus temporalidades, que hoy propiamente no las tienen, y a lo sumo decretar su extrañamiento, llevándolo a efecto, con toda la consideración y respeto que se debe, cuando no a la persona al carácter y dignidad por lo menos. Sería por cierto un espectáculo curioso, el ver marchar al gobernador de la iglesia a la cárcel, por el gran delito de haber usado de su derecho; porque a mi juicio, señor presidente, lo tiene un eclesiástico, como un seglar, no sólo para publicar por la prensa rescriptos de pase negado, y no publicados por el gobierno, sino aun para analizar e impugnar los fundamentos de la negativa. Nuestro actual derecho público, autoriza a hacer hoy muchas cosas que en la época colonial eran ilícitas. Los eclesiásticos no han dejado de ser ciudadanos, o por lo menos habitantes del suelo argentino, y la Constitución otorga y garantiza a todo habitante, el derecho de emitir sus ideas por la prensa, en toda materia.

Así es, que si el Congreso aceptase este artículo, tal cual está no haría más que prohibir, en materia de rescriptos pontificios, la libertad de la prensa, y de consiguiente, legislaría sobre ella. Haría más: vendría a establecer sobre ella la jurisdicción federal; todo lo cual le está expresamente vedado por la Constitución.

No: no puede pasar semejante absurdidad. Asombraría, señor presidente, que en el año 63 del siglo XIX, cuando todo habitante ejerce ampliamente la facultad de hacer saber, y de censurar y juzgar todos los actos de los poderes públicos; cuando entre nosotros domina el sistema de la publicidad en todo; cuando ha tiempo que el gran principio de la igualdad en los derechos fué elevado a la dignidad de dogma, apareciera el Congreso argentino

fulminando, con aire de encono, una ley monstruosa y terrible, que amenaza con tres años de cárcel, y pone un coto tan extraordinario al ejercicio pleno del primero de los derechos que se conquistaron el año 10; de modo que sólo a los eclesiásticos sea negada la gran satisfacción de poder exclamar: *Rara temporum felicitate...* (Aplausos).

En la legislación penal francesa, de la cual me parece que los autores de este proyecto han tomado mucho, hay algo de penalidad a los ministros del culto, pero eso es cuando en el ejercicio de su ministerio, en el púlpito por ejemplo, insultan, atacan o censuran los actos de las autoridades; o cuando lo hacen por escrito, con circulares pastorales, etcétera; no se habla de cuando lo hagan por la prensa. En Francia, señor, han dominado otras ideas, nacidas de pretensiones de Roma, contra las que se quería precaver al Estado; y sobre todo, es distinto allí el sistema político. En el nuestro está consagrada la plena libertad de imprenta; y por eso choca más el oír que cualquiera persona que tome un despacho romano y lo envíe a la imprenta, aun sin censurarlo, sin criticarlo, sin comentarlo, sufrirá tres años de cárcel, por el solo hecho de haberlo publicado. ¿Qué quiere decir esto? Debe pues, suprimirse esa parte del artículo, y limitarlo al caso en que se ponga ilegalmente ejecución un despacho. Y diré de paso que no creo necesario el empleo de las expresiones «un breve, una bula, un rescripto» porque el breve y la bula son rescriptos; esta es una voz genérica que comprende todos estos documentos.

Otra alteración más exige el tenor del artículo. El habla de todo rescripto, sea cual sea y sin distinción: esto bien puede ser un mero descuido, pero de todos modos sería indebido, y es de necesidad reformarlo, para evitar ciertas cuestiones; porque es de advertir que hay varios breves que, ni por las leyes, ni por la costumbre, hay obligación de presentarlos todos; los breves de penitenciaría, están en ese caso.

Así es que el artículo debe referirse a sólo aquellos rescriptos que por las leyes necesiten el exequátur del Poder Ejecutivo. En suma, juzgo que debe establecerse: que quien ejecute cualquier rescripto, de los que lo necesitan, sin haberlo presentado, quedará sujeto a tal pena; y quien lo ejecute cuando habiendo sido presentado, le ha sido negado el pase, a tal otra. A esto, señor presidente, debe concretarse el artículo; suprimiéndose lo de «quien

le diese curso o publique», porque eso es evidentemente contrario a la justicia y a los principios.

Sobre este artículo, tal como está concebido, adelantaré algunas otras observaciones, si algunas réplicas se hicieren.

Sr. Presidente. — Si a la Cámara le parece, pasaremos a cuarto intermedio.

—Se pasó a cuarto intermedio, y pocos momentos después volvieron a la sala los señores senadores.

Sr. Navarro. — He pedido la palabra, señor presidente, con el objeto de desvanecer algunas impresiones desfavorables que puede haber causado el discurso del señor senador por Buenos Aires, porque, a mi juicio, se ha fundado sobre un concepto equivocado. El señor senador ha creído que este artículo penaba por el hecho simple de publicar un breve o un rescripto de la Corte Romana; pero eso no es el espíritu del artículo, ni la mente de los que lo formaron. El que diese curso o publicase, quiere decir: el que publique o le dé curso ante la justicia. Así es que la simple publicación, hecha como las noticias que dan los periódicos, no puede considerarse como un delito, si por otra parte, no se ha incitado a hacer cumplir o ejecutar una cosa que no debe ser cumplida ni ejecutada, sino mediante el permiso de la soberanía del país; porque es preciso no perder de vista, que la Corte Romana representa dos caracteres; primero, como jefe espiritual de la Iglesia universal, a cuyo respecto se le considera como soberano universal; y segundo, como soberano temporal de los estados pontificios; y como tal, se la considera como cualquier otro soberano extranjero; así es que cualquier breve, cualquier rescripto, bula o disposición suya, para ejecutarse fuera de los estados pontificios, necesita del exequátur del soberano del país donde se ejecute. Por eso es que las leyes de todos los países no han permitido jamás que ninguna bula, rescripto o cualquier otro mandato del soberano temporal de los estados pontificios de Roma, pueda ejecutarse. Ninguna nación quizá más católica, ni más religiosa que España; y sin embargo, pocas naciones han puesto en sus leyes una severidad mayor respecto de los mismos puntos de disciplina. Tanto es así, que el escribano que autorice una escritura de obligación en que un lego se someta a la jurisdicción eclesiástica, pierde su oficio, y es inhabilitado para ejercer ningún otro

cargo en el Estado, y algunas otras penas más.

El sentido, pues, de este artículo, sólo comprende al que publicase estos breves o rescriptos para darles curso. Ya hemos visto aquí en el año 58, que se han publicado en algunas parroquias de la ciudad de Buenos Aires, bulas del siglo XII, contra los masones. ¿Cuál es el «pase» que han tenido estas bulas en la República Argentina y con qué autoridad las ha publicado el obispo en las parroquias de Buenos Aires? Sin embargo se han tolerado; pero eso no debe tolerarse de ninguna manera, porque todavía hay quienes quieran levantarse contra el patronato; allí está un periódico que se publica aquí, que le niega al gobierno el derecho de patronato, y el que se dice que el gobierno quiere revocar los cánones, pero el gobierno no trata de revocar cánones; lo que trata es de negar o impedir el cumplimiento de bulas que no están en vigencia, a fin de que no vengan a imponerse como órdenes de un poder extranjero. Esto es lo que no quiere el gobierno, ni debe consentirlo jamás.

Bien, señor, hecha esta observación con relación a lo que el señor senador dijo, es decir, que le parecía que este artículo envolvía una orden, o una prohibición injusta contra la Iglesia, diré en seguida, que en lo demás, no deja de tener algún fundamento su observación. Así es que en el cuarto intermedio, hemos convenido en darle una nueva redacción a este artículo que parece que lo concilia todo.

Sírvase leer la redacción, el señor secretario.

—Se leyó.

Sr. Navarro. — Se ha observado que el artículo decía: «el que ejecutase en la Nación»; pero se ha observado que hay delito en ejecutar y en mandar ejecutar. Supóngase que el obispo reciba un breve o bula de Roma, y que mandara a los curas que la ejecutaran, y que los curas no las ponen en ejecución. Pregunto yo ahora: ¿ha podido el obispo mandar ejecutar una bula sin tener permiso del gobierno? No, señor, ha cometido un delito y debe tener una penalidad.

Supongamos por otro lado, que los curas, sin que el obispo se lo mande, ejecutan una bula o un breve. También hay delito en ejecutar una cosa sin que los superiores la ordenen. Así es que se ha admitido que se ponga: «el que ejecute o mande ejecutar sin permiso...» Ahora, la penalidad seguirá conforme estaba, añadiendo solamente una diferencia,

Junio 30 de 1863

CAMARA DE SENADORES

24a Reunión. 19a Sesión ordinaria

es decir, cuando se ejecuten o manden ejecutar breves o rescriptos, sin el permiso previo del gobierno. Este es un delito; pero ejecutarlas o mandarlas ejecutar a pesar de que el gobierno haya negado el «pase», ya es otro delito más grave. Por eso es que en el primer caso se impone la pena del artículo 1º y en el segundo caso, las dos penas, es decir, la prisión y la multa.

Esto es lo que tenía que observar al Senado. He dicho.

Sr. Alsina. — Habiendo dimanado de mí la objeción, debo declarar que esta redacción se ha hecho de acuerdo conmigo, y que nada tengo que decir; pero el deseo de no prolongar esta discusión, me hace no entrar a contestar a algunos conceptos que acaba de vertir el señor senador.

Sr. Elías. — Sin embargo de que considero que es un error de imprenta lo que voy a observar, respecto de una palabra del inciso 3º, del artículo 1º...

Sr. Presidente. — Permítame el señor senador. ¿Es otra observación que va a hacer, o va a hablar sobre el mismo punto?

Sr. Elías. — No es sobre el mismo punto, pero es sobre el proyecto que está en discusión.

Sr. Presidente. — Primero vamos a votar este artículo, y después el señor senador podrá hacer las observaciones que quiera.

—Se votó el artículo tal como lo proponía nuevamente la Comisión, y resultó aprobado por afirmativa general.

Sr. Elías. — Decía, señor presidente, que encontraba alguna irregularidad en la redacción del inciso 3º. Creo que debe ser un error; pero, como el señor miembro informante de la Comisión, ha declarado que los errores de imprenta están salvados por una fe de erratas, y lo que voy a hacer notar no está salvado, le pregunto al señor miembro informante, qué se entiende por puerto militar.

Sr. Navarro. — Puerto militar quiere decir donde hay arsenales o astilleros para construir buques de guerra, como el puerto de La Coruña en España, y el de Marsella en Francia.

Sr. de la Vega. — Siento, señor, tener que molestar la atención de la Cámara para hacer algunas observaciones sobre el proyecto en discusión; pero en la necesidad de contribuir a que sea más completa esta ley, voy a indicarle ligeramente.

En el artículo 39 se establece la pena que tienen los que substraen de la acción de la

justicia a los criminales, porque el artículo dice así... (*Leyó*). En este artículo, en el 40 y el 41, noto una deficiencia, y es la siguiente: que aquellos que han intentado, puesto en práctica su intento, y que no han podido substraer a los reos de la acción de la justicia, no se les impone ninguna pena para castigarlos. Siendo una cosa tan fácil, porque con agregar dos palabras, puede designarse la pena en que han incurrido los que han puesto en práctica su intento, y no han podido substraer a los reos de la acción de la justicia; yo creo que podía agregarse esto.

Sr. Navarro. — Realmente, que el intentar substraer los reos, poniéndolo en ejecución por las vías de hecho, aunque no lo consiga, es un delito que puede ser clasificado casi como el principal; porque es sabido que los delitos frustrados por circunstancias independientes de la voluntad del actor, se consideran como delitos principales; pero a fin de no hacer tantas modificaciones a este proyecto, y de obviar toda dificultad para su adopción, haré presente a la Cámara, que hay un artículo final que dice: los delitos contra la Nación no previstos por esta ley, etcétera, serán castigados con arreglo a los códigos que forman el derecho común de las provincias. Así es que, todo delito que no esté aquí clasificado, no ha de quedar impune, porque se hace una remisión a las leyes generales. No se trata aquí tampoco, de formar un código penal completo; eso ha de venir muy pronto; el Congreso ha sancionado una ley, para que se nombren comisionados para confeccionar esos códigos; esta de que ahora nos ocupamos, es una ley que se puede llamar provisoria, para que sirva a los tribunales que van a entrar en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, no creo que sean necesarias todas esas adiciones para que la ley sea benéfica, puesto que estas omisiones no han de causar tan graves perjuicios. Así es que, yo desearía que el Senado no se preocupase demasiado en esta sanción; porque vamos a emplear más tiempo del necesario.

Sr. de la Vega. — He dicho que no quería hacer cuestión de esto, sin embargo de que con agregar una palabra quedaría perfectamente el artículo.

Sr. Navarro. — Determine la palabra, que si es apoyada, se agregará.

Sr. de la Vega. — Me parece que con la idea indicada, basta.

Sr. Palma. — Puede indicar la palabra el señor senador.

Sr. de la Vega. — «En el caso que se frustrase el intento, tal pena», lo dejaría al juicio de la Comisión.

Sr. Uriburu. — Primero debe votarse el artículo de la Comisión tal como está, y si se rechaza, se votará entonces con la modificación.

Sr. Presidente. — Son tres los artículos que se observan; se votarán los tres.

Sr. Alsina. — Será mejor votar artículo por artículo, porque yo iba a hacer idéntica observación respecto del artículo 41.

Sr. Presidente. — Lo más sencillo era votar si se aceptaba la modificación propuesta; sin embargo se hará como lo pide la comisión.

—Se votó el artículo 39 tal como lo proponía la comisión, y resultó aprobado por afirmativa contra 3, lo mismo que lo fué en seguida el artículo 40.

Sr. Alsina. — Este artículo dice... (*Leyó*). A mi ver, hay una omisión y creo que no hay inconveniente en enmendarlo. Aquí se pone: en caso que se haya verificado la fuga, tendrá tal pena; pero aunque no se haya verificado la fuga, debe tener una pena, porque el hecho de introducirse por fuerza en la cárcel pública; el hecho de obligar al alcaide a que deje fugar los presos, ¿no es por sí solo un delito? Ese hecho debe castigarse y no decir que la pena tendrá lugar sólo en el caso que se haya realizado la fuga de los presos; aunque no se haya realizado, es delincuente. Es la observación que tenía que hacer.

Sr. Uriburu. — Pero no puede incurrir en la misma pena.

Sr. Alsina. — El delito ha sido atropellar la cárcel con fuerza armada, y forzar al alcaide a que permita la fuga de los presos.

Sr. de la Vega. — Como la observación que ha hecho el señor senador por Buenos Aires está fundada en el mismo principio que yo indiqué, estoy perfectamente de acuerdo en que se establezca una pena para el que intente sustraer los reos de la mano de la justicia. Este era el delito que yo quería que se castigase.

Sr. Uriburu. — En este artículo está prevista la pena que se ha de imponer al que con fuerza armada intente sustraer los presos. El caso presentado por el señor senador por Buenos Aires, es distinto; es decir, cuando se intenta sustraer los presos. No se designa la pena en este caso, porque es una cosa nueva; pero está salvado con las penas previstas en las leyes generales.

Sr. Alsina. — No nos atengamos a que en las leyes generales todo está previsto, porque

entretanto ¿a qué estamos designando penas en todos los artículos?

Sr. Presidente. — Se votará el artículo 41 tal como lo ha presentado la comisión.

—Se votó y resultó aprobado por afirmativa de 13 votos contra 11.

Sr. Laspiur. — El artículo 26 del título 5º, referente a las disposiciones comunes a los dos títulos anteriores, que hablan de las revoluciones y de las sediciones, dispone así: (*Leyó*). Deseo que el señor miembro informante de la Comisión manifieste a qué autoridad nacional se refiere este artículo para continuar en las observaciones que tengo que hacer.

Sr. Navarro. — A la autoridad más inmediata, a la policía; si la policía no tiene bastante fuerza, pedirá auxilio a otra fuerza mayor.

Sr. Laspiur. — Si este artículo se refiere a la autoridad policial dependiente del Poder Ejecutivo nacional, creo inútil esta disposición en una ley que sólo habla de las penas que tienen que aplicar los jueces. Esta disposición sería buena en la ley de elecciones o en cualquiera otra. Si se refiere a los jueces federales, tampoco pueden ejercer estas atribuciones, porque son funciones administrativas de los empleados del Poder Ejecutivo, no de un juez que desempeña sus funciones juzgando en las causas contenciosas.

Sr. Navarro. — A la autoridad judicial es a la que principalmente compete prender a los criminales. Las revoluciones pueden empezar por pocos individuos; pero al mismo tiempo pueden anunciar que tendrán proporciones más colosales, más trascendentales, y entonces el juez federal a quien se le ha denunciado una conspiración, puede muy bien transportarse él mismo, o mandar sus agentes a prender a los conjurados, pero si éstos aparecen en número superior al que el juez puede tener entonces el juez se hallará en el caso de hacer la intimación que prescribe esta ley. Así es que sin dejar de pertenecer este punto a las funciones administrativas, también puede pertenecer a la autoridad judicial. En mi concepto, no encuentro que sea impropia de este lugar esta disposición.

Sr. Palma. — Creo que las dudas que ha manifestado el señor senador preopinante, están salvadas por la misma redacción del artículo, que dice: luego que se manifieste la rebelión o la sedición, la autoridad más inmediata, etcétera. Esto quiere decir que si se hubiera sublevado un cuerpo o una parte de ciudada-

Junio 30 de 1863.

CAMARA DE SENADORES

24ª Reunión. 19ª Sesión ordinaria

nos de un departamento, la autoridad nacional más inmediata está llamada a reprimir la rebelión. Pero se dice que un juez de sección no debe tener estas funciones. Yo creo que para hacer una amonestación o una intimación, no hay necesidad de usar de la fuerza, y por consiguiente puede hacerla el juez de sección. Yo creo que la redacción del artículo está perfectamente clara, mucho más cuando no puede determinarse la autoridad, porque es imposible ponerse en cada uno de los casos.

Sr. Presidente. — No sé si el señor senador que hizo la observación querrá que se vote este artículo.

Sr. Laspiur. — Sí, señor; pido que se vote porque no me satisfacen las explicaciones dadas. Un juez federal es esencialmente pasivo; no puede obrar sino después de una cuestión contenciosa, en que ha habido contradicción en ambas partes. Además estas son medidas preliminares para contener una rebelión; antes de juzgar, antes de hacer nada, contenerlas por medio de la fuerza pública; pero ya he dicho que no quiero prolongar esta discusión.

—Se votó el artículo 26 que se discutía, y resultó aprobado por afirmativa contra 2.

Sr. Alsina. — No me demoraré, señor presidente, sobre algo que he encontrado en el título que habla de piratería, porque no quiero prolongar la discusión. No me agrada ver que se llame piratería al navegar armada una embarcación sin pasaporte, ni al navegar un comandante de buque armado, con dos o más patentes de diversas potencias. Esos son delitos indudablemente, pero no de piratería; se les puede llamar más bien conato o intento de piratería, pues no porque un buque navegue de esos modos se ha de decir que de hecho y forzosamente asalta, pillas y mata. Es verdad que en el proyecto se aplican a estos actos penas diferentes de las que se aplican a la verdadera piratería; mas por lo mismo, es impropio que cuando el encabezamiento del título dice: «se comete piratería», se incluyan esos actos entre otros que realmente la constituyen. Pero dejando este punto, tocaré otro distinto.

Dice el artículo 15... (*Leyó*). Y en el caso que el caudillo que promueve la rebelión sea un jefe militar ¿incurrirá, según la disposición general de este artículo, en sólo la pena que él designa? Sería eso indebido, porque esa pena no es la que verdaderamente merece el militar que comete un acto de esa naturaleza; verbi-gracia, el jefe de división que se levanta, incurre en la de muerte, y entonces tiene lugar

una causa, cuyo fuero es el de guerra. Por esto yo quisiera que aquí, donde se habla de los caudillos, ya que la declaración de la pena pertenece al juicio militar, se consignara alguna expresión para que se entienda así; porque mañana, el jefe que cometa este delito puede agarrarse de esta ley y decir: yo no puedo ser condenado a muerte, sino a la pena que designa esta ley. Esto es lo que quisiera ver salvado.

Sr. Navarro. — Hay un artículo en el proyecto que no recuerdo, pero que deja la parte de la legislación militar para que no se toque en nada las leyes vigentes.

Sr. Madariaga. — Se supone que hay un código militar.

Sr. Alsina. — Yo creo que no está; está en el código francés, del cual se ha tomado mucho aquí; pero yo no he encontrado el artículo en la lectura que he hecho.

Sr. Navarro. — Aquí está.

—Leyó el artículo 7º.

Sr. Alsina. — Bien; así queda salvado.

Sr. de la Vega. — Aquí se trata con bastante detención de la pena en que incurre el que resiste la autoridad, bien sea como delincente o como protector del delincente. Extraño, señor, que aquí no se hable nada de las penas en que incurren las autoridades que mandan prender arbitrariamente. Es una prescripción de la Constitución que nadie puede ser aprehendido sino en virtud de orden escrita por autoridad competente.

Este precepto constitucional casi nunca se cumple en las provincias; la infracción de este precepto constitucional importa un delito, y este delito debe tener alguna pena establecida para hacer prácticas las prescripciones constitucionales. Yo hablo con conocimiento de causa; casi no hay ejemplo en las provincias de que las prisiones se hagan con las formalidades establecidas por la Constitución, sino que se manda un soldado cualquiera para que traiga preso a un ciudadano. Si el ciudadano pide orden escrita, no se le da; si se resiste el ciudadano, se le lleva por fuerza. Así, pues, ya que la ley se ha contraído a establecer las penas que merece el que resiste a la autoridad, debe también pensarse al juez que manda ejecutar una prisión ilegítima. Desearía que ese artículo se consignase aquí, para hacer desaparecer esos abusos muy constantes en las provincias.

Sr. Ministro de Culto. — Creo que la observación que hace el señor senador, está salvada por un artículo de esta ley que no recuerdo;

pero hay una disposición que establece que si un individuo fuere preso indebidamente, ya porque el juez no tuviera jurisdicción sobre él, o ya porque la prisión no se hubiera hecho con las formalidades debidas, el juez federal lo hará poner en libertad inmediatamente: es claro que ante el juez federal pueden hacerse las reclamaciones que tengan lugar. Por consiguiente, parece que están salvadas las observaciones del señor senador.

Sr. de la Vega. — Tenía presente el artículo a que se refiere el señor ministro; pero entiendo que no se salva la dificultad, porque con devolver al ciudadano su libertad, no está castigado el delito de haberse puesto preso indebidamente. Yo quisiera que se castigase esa falta tan arraigada en las provincias, donde cualquier empleado subalterno de la administración es dueño de disponer de la libertad del ciudadano sin orden escrita; si este subalterno tuviera que responder personalmente, si tuviera una pena establecida ya, que él la conociera, no ejecutaría esas prisiones ilegítimas sin tener orden del superior. Así ha sucedido frecuentemente con infinidad de ciudadanos que han sufrido prisiones ilegítimas, que han sufrido privaciones, para que los hagan salir después sin imponer ninguna pena al que los ha hecho sufrir indebidamente.

Sr. Ministro de Culto. — Reclama ante el juez federal; y desde que el juez federal tiene facultad para mandarlo poner en libertad, es claro que tiene el poder de dar reparación de los perjuicios que tengan lugar.

Sr. de la Vega. — No es mi objeto que se establezca la jurisdicción del juez federal para entender en estas causas; quiero que se establezca una pena contra los infractores de esta prescripción constitucional; que se establezca una pena contra el que manda hacer una prisión ilegítima y contra el que la ejecute. Así, quiero ver un artículo aquí, que garantice la independencia y la libertad de los ciudadanos contra los procedimientos ilegítimos de las autoridades.

Sr. Navarro. — El artículo a que el señor ministro creo que se refería, es el artículo 20 del proyecto número 1. (*Leyó*). Este artículo, directamente, no prescribe más que una prerrogativa, que es como el hábeas corpus inglés y norteamericano. Hecha una prisión ilegal, los tribunales mandan ver por orden de quién está preso, y si no es por orden de autoridad competente, mandan poner al individuo en libertad; pero aquí hay otro artículo que dice... (*Leyó*). Quiere decir que en caso de dar prisión

indebida o ilegítimamente, queda expedito el preso para usar del derecho de repetición por los daños, perjuicios o injurias ante la justicia ordinaria, o ante la justicia nacional, según sea el caso. De manera que, si no se han dado providencias suficientes para evitar esas prisiones, que el señor senador teme, con justa razón tenemos el artículo de la Constitución que dice... (*Leyó*). Esta es una de esas bellezas aparentes que tiene nuestra Constitución hecha a la francesa, admitiendo las declaraciones de derechos del año 91; pero esto no puede llevarse a la práctica, porque es imposible. Se comete un asesinato en una tienda, en cualquier casa, y sale el matador a la calle huyendo; lo toma un celador o un sereno, ¿hay que esperar orden escrita para prenderlo?

Sr. Madariaga. — Creo que el señor senador se sale de la cuestión, porque no corresponde a la jurisdicción de las provincias; aquí estamos legislando para los casos nacionales; eso está en la soberanía de las provincias, en las constituciones provinciales.

Sr. de la Vega. — Considero muy importante este punto, y que no hay ninguna dificultad para consignar esa disposición. Por consiguiente, no encuentro razón para que no se haga, si es justo. Los artículos de esta misma ley, que se han citado por el señor miembro informante de la Comisión, vienen a fundar más la necesidad de consignar esto. Esos artículos establecen el derecho del ofendido para reclamar ante la autoridad competente. Bien, pues; el documento que yo exijo, la orden escrita de la autoridad competente, es para tener el derecho de reclamar alguna vez; para poder reclamar contra ese gobernador arbitrario que manda poner preso a un ciudadano, contra el juez de policía o contra cualquier otra autoridad. Ese documento justificativo del acto, lo exijo, señor, porque los hombres que proceden arbitrariamente, tienen buen cuidado de no largar ese documento, documento que puede ser funesto para ellos. Así es que yo estoy porque se imponga alguna pena al que ejecute una prisión, sin llenar las facultades prescriptas por la Constitución. Creo que agregar un artículo de esta naturaleza al proyecto que se discute, no es motivo de discusión, sino una necesidad de alta conveniencia. Yo hablo con experiencia, porque en mi misma persona se han cometido esas violaciones, sin que haya podido quedarme yo con algún documento para reclamar contra las arbitrariedades que han cometido contra mi persona.

Sr. Presidente. — Como es una proposición nueva, no hay sobre qué recaer la votación, y sería preciso que el señor senador redactase un artículo.

Sr. de la Vega. — En ese caso propondría pasar a cuarto intermedio para poderlo redactar.

Sr. Alsina. — Podríamos también seguir adelante, y en otra sesión puede traer redactada el señor senador la proposición que está apoyada. Aunque concluya este proyecto, no importa; se introduce en la sesión siguiente la adición.

Sr. de la Vega. — Hablando de la falsificación de moneda, o de los que introducen moneda falsa, este artículo dice... (*Leyó*). Parece que el artículo, tal como está, sanciona la libertad de acuñar moneda, libertad que no puede menos de ser funesta. ¿Por qué solamente se pena en el caso que la moneda introducida o acuñada sea de valor inferior al que efectivamente representa? Yo le pregunto a la Comisión: si fuera de valor igual, ¿qué pena se aplica? Es decir, si una onza de oro acuñada por un particular, representa los 17 pesos, plata, o la onza legítima, acuñada por orden del Estado ¿qué pena tiene? O hay libertad absoluta para acuñar moneda, o es necesario aquí expresar que el acuñarlas sin orden de la autoridad, sin autorización, es una falta, y esa falta debe castigarse. No encuentro tampoco consecuencia con la segunda parte del artículo que dice: si la moneda fuera de cobre, aunque el valor fuera igual, sufrirá tal pena. ¿Por qué se establece esto respecto de la moneda de cobre, y no se establece lo mismo respecto de la moneda de plata o de oro? Quisiera oír algunas explicaciones del señor miembro informante a este respecto.

Sr. Madariaga. — Eso ya sería entrar en una larga discusión; todo eso está salvado en el informe y en los comentarios. Además, es una cosa muy difícil que sucediera.

Sr. de la Vega. — Yo creo que si la economía de tiempo basta para tranquilizar la conciencia del señor senador que ha dejado la palabra, eso no basta para tranquilizar la mía; yo me creo en el deber de hacer todas aquellas observaciones que tengan alguna importancia, y por eso he hecho ésta y algunas otras más. Digo, señor, que el artículo tal como está sanciona la libertad de acuñar moneda de plata y oro, si no se establece alguna pena para los casos en que la moneda tenga efectivamente el valor que representa, aunque esa moneda haya sido acu-

ñada sin autorización de la autoridad. Mientras tanto, hablando de la moneda de cobre, dice que aunque la moneda sea igual en valor, sufrirá tal pena. Quiere decir que, cuando la moneda sea de plata u oro, siendo de valor igual, no sufre pena ninguna, y es la inconsecuencia que yo noto.

Sr. Navarro. — Nadie se pone a sellar moneda del mismo valor legítimo, porque sería un mal negocio. Los que se proponen falsificar moneda, le dan menos valor intrínseco. Por eso no se prevé el caso.

Sr. de la Vega. — ¿Por qué lo supone en el cobre?

Sr. Ministro de Culto. — Me parece que puedo satisfacer al señor senador. Muy oportunamente ha observado el señor miembro informante que es muy difícil, y aun imposible, que nadie se ponga a falsificar el oro ni la plata, dándoles el mismo valor, porque no se concibe qué utilidad pudieran recoger.

Bien, pues; el que falsificare, según los términos del señor senador, no cometería delito de falsificación; cuando más, habría usado indebidamente del sello del Estado, y ese delito debería castigarse por algunas prescripciones de las leyes pero no como falsificador de moneda. Parece, pues, que la disposición del artículo, con respecto a los que falsifiquen las monedas de oro y de plata, es perfectamente arreglada, dejando a la facultad de los jueces castigar con una pena arbitraria a los que se contraen en otro caso.

En cuanto a la moneda de cobre, me parece, según entiendo, que no representa en su valor intrínseco, como la de plata, sino el valor que tiene en circulación. Por consiguiente, aquel que falsificase moneda de cobre, aunque fuese del mismo valor que la moneda verdadera que corre en el Estado, cometería un delito de falsificación, y por consecuencia debe ser castigado.

Sr. de la Vega. — Diré dos palabras, porque siento no estar satisfecho con las explicaciones que se han dado.

La misma razón que se ha expuesto con respecto al cobre, existe respecto a la moneda circulante. Tenemos la moneda boliviana que corre como legal, y cuyo sello presenta una ganancia verdadera. Tenemos la moneda cordobesa que no tiene el valor que expresa, porque no es de la ley, la que en su sello presenta una gran ganancia, así como el sello de cobre presenta utilidad, porque vale más que el cobre bruto. Esta es la dificultad que yo indico.

Sr. Alsina. — Siempre tengo que hacer la misma advertencia. Supongo que stá terminado este punto.

Sr. Presidente. — No sé si se exige que se vote este artículo.

Sr. de la Vega. — Sí, señor.

—Puesto a votación el artículo 57, fué aprobado por afirmativa contra 4.

Sr. Alsina. — Seré muy conciso, y tal vez no hablaré más sobre este proyecto.

Noto en él un vacío: se habla de sedición, de rebelión, etcétera, y no se habla de otros actos que son parecidos a éstos, y que constituyen un delito.

No se habla de la conspiración, que es cosa muy diferente.

El hecho de hablarse, de convenirse para hacer una revolución tal día, buscar armas, buscar prosélitos, en fin, lo que se llama conspirar, no es un acto que se revela por ningún hecho exterior, como sucede en los casos de motín, etcétera. Me parece que falta ese título, o un título que hable de la conspiración en esta ley; a mi juicio, a este título es al que vendría a corresponder el caso de que hablé al principio, relativo al que procurara incitar a un gobierno extraño a que declare la guerra al nuestro. Ese no hace más que conspirar contra su país. Ese inciso que se suprimió en el concepto de darle colocación después, sería en el título de la conspiración donde pudiera tener lugar.

No creo necesario insistir más.

Sr. Navarro. — Está previsto lo que el señor senador observa. En el título 1º del proyecto en discusión y en el artículo 3º, se dice: «la conspiración de dos o más personas», etcétera.

Sr. Alsina. — No es el caso. Conspirar para echar mañana abajo el gobierno de Buenos Aires, eso no es traición, y sí, lo que se llama conspirar. Esta conspiración hasta el momento de declararse en motín, es cosa muy distinta de la traición. Yo encuentro que se podía agregar algunas palabras, y traer a este punto el caso de que hemos hablado.

Sr. Navarro. — La regla general en materia penal, — al menos así lo enseñan los tratadistas, — es que el mero pensamiento del hombre mientras no le dé un principio de ejecución, no es delito. La conspiración, suponiendo ya los conspiradores reunidos, supone un delito, sea de traición o de cualquier otra clase; pero si no ha empezado a tener ejecución,

no cae bajo la jurisdicción penal. Una vez que se pone en ejecución, entonces será traición, rebelión o sedición. La conspiración en sí misma no es un delito que esté sujeto a la jurisdicción de los hombres; el pensamiento está reservado a Dios.

Sr. Alsina. — Pero si no es eso lo que se dice. El conspirador se reúne con otros en una casa, busca armas, trae pólvora, se complota con tal fin, y esto es lo que se llama conspirar, a menos que crea el señor senador que esto es pensamiento. En todas partes la conspiración se castiga. ¿Ha olvidado el señor senador, que el gobierno llevó a la cárcel una porción de conspiradores, no ha mucho tiempo? Cicerón aprisionó a Catilina y le hizo dar garrote, y sin embargo no hacía más que conspiración.

El conspirar es un hecho, no es sólo pensar dentro de la cabeza.

Sr. Uriburu. — Está previsto el caso; se castiga con la pena de trabajos forzados. (*Leyó el artículo 3º*).

Sr. Alsina. — Es hablando de traición. Pero en fin, yo hago la indicación; si no acepta la idea la Comisión no insistiré, porque no deseo prolongar el debate.

Sr. de la Vega. — Yo apoyo la indicación para que con vista de lo que está establecido, se agregue lo que falta. Podrían encargarse los señores senadores de hacer la redacción, como se ha convenido antes con otros artículos.

Sr. Alsina. — La Comisión es muy apta para eso.

Sr. Laspiur. — Yo apoyo también la indicación, en el sentido de que se prorrogue la discusión de este asunto, sin embargo que no estoy conforme completamente con el señor senador por Buenos Aires.

El ha citado como ejemplos, para probar la necesidad de que haya un título expreso sobre conspiración, el hecho que se conspirara o se tramara una revolución, sin tener principio de ejecución, contra un gobierno de provincia, contra el de Buenos Aires, por ejemplo. Pero debo decir que el delito de conspiración, de revolución contra las autoridades provinciales, cae bajo la jurisdicción de la provincia, no bajo la federal, y para ese caso debe regir la ley de la provincia, o la ley común.

La única conspiración que se puede intentar contra las autoridades nacionales, está prevista en los delitos de rebelión.

Ahora los delitos de alzamiento no sé si están previstos aquí y por eso digo: téngase presente la idea para discutirla después.

Junio 30 de 1863

CAMARA DE SENADORES

24ª Reunión. 19ª Sesión ordinaria

Sr. Navarro. — Aquí no se ha hecho observación sobre ninguno de los artículos que se discuten sino que se han propuesto adiciones, sobre omisiones que se indican, o para darles más ensanche. De consiguiente, como acaba de indicar el señor senador por San Juan, que esta materia se deje para otra sesión, a fin de estudiarla mejor, yo pediría que se suspendiera la discusión y como me parece que no hay más que observar, se diera por sancionada.

Sr. Presidente. — Queda en libertad el señor senador por San Juan para traer las modificaciones que le parezca en la próxima sesión, así es que, votándose sobre el proyecto, no queda la puerta cerrada.

Pero es que se dijo que el inciso 1º se había de colocar en otra parte, y no sé si quedará en suspenso.

Sr. Laspiur. — El señor senador por Buenos Aires había indicado que un título, que él echa

de menos en esta ley y que debe hablar de conspiración; debía tener un lugar en este inciso.

Sr. Presidente. — Entonces puede quedar para colocarse según el resultado definitivo.

—Dado el punto por suficientemente discutido se puso a votación el proyecto número 2 y fué aprobado por afirmativa general.

Sr. Presidente. — Deseo saber si el Senado quiere continuar la discusión, para entrar en otro proyecto.

Sr. Navarro. — Será mejor dejarlo para otra sesión, porque es muy extenso.

—La sesión se levantó a las cuatro de la tarde.